

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA
DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL CATORCE
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE MÉXICO**

En la ciudad de Toluca, México a las diez horas del día dieciséis del mes de mayo del año dos mil catorce, reunidos los servidores judiciales que integran el Comité de Información del Poder Judicial del Estado, conforme lo dispone el artículo 6 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de México, se da inicio a la presente sesión Extraordinaria bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

De conformidad con lo que dispone la fracción III del artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el Poder Judicial es sujeto obligado a rendir la información de oficio y que a petición de parte le sea requerida, por lo cual se lleva a cabo la presente sesión Extraordinaria del Comité de Información, con base en lo que disponen los artículos 29 y 30 de la propia Ley y 9 del Reglamento institucional en la materia, convocada previamente por parte del Presidente del Comité, procediéndose al desahogo del Orden del Día, al tenor de los puntos siguientes:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de presentes y declaración de quórum;
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día;
- 3.- Acuerdos para dar respuesta a peticiones que requieren acuerdo del Comité de Información:
 - 3.1.- Presentación de solicitudes de acceso a información pública;
 - 3.2.- Presentación de solicitudes para ejercer derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO).

DESAHOGO DE LA SESIÓN

Por cuanto hace al primer punto del Orden del Día, el Secretario de éste Comité procedió a verificar el quórum, y se dio cuenta con la asistencia de todos los que integran el presente Comité, siendo:

Lic. Joel Alfonso Sierra Palacios.- Consejero de la Judicatura y Presidente del Comité;

Lic. Lorenzo Hernández Morales.- Director General de Contraloría e integrante del Comité; y

Lic. Heriberto Benito López Aguilar.- Titular de la Unidad de Información y Secretario del Comité.

Por lo que, al encontrarse presentes todos los integrantes existe quórum para celebrar ésta sesión Extraordinaria.

En atención a lo anterior, el Presidente del Comité declara instalada legalmente la sesión.

Con relación al segundo punto del Orden del Día, el Presidente somete a consideración del Comité el Orden del Día, instruyendo a la secretaría del propio Comité recabe la votación correspondiente.

En consecuencia, el Secretario del Comité da cuenta con la votación correspondiente por lo que se dicta el siguiente:

ACUERDO: PRIMERO	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA
---------------------	---

Con relación al tercer punto del Orden del Día, el Comité se pronuncia de la manera siguiente:

Respecto a asuntos que requieren acuerdo de éste Comité, la Secretaría da cuenta que a la fecha existe *una* petición de acceso a información pública y *otra* para ejercer derechos ARCO, por lo que las mismas habrán de ser atendidas según el orden cronológico y la fecha de presentación.

3.1.- Presentación de solicitudes de acceso a información pública.

A).- Acuerdo para atender la petición número 00213/PJUDICI/IP/2014, presentada por .

Antecedentes

Vista la solicitud de mérito a través de la cual se peticiona lo siguiente:

“Oficina de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Por medio del presente, ejerciendo mi derecho consagrado en el Artículo 8 Constitucional, solicito se me proporcionen dos (02) resoluciones dictadas por los Jueces de Juicios Orales de Tlalnepantla (Barrientos), de asuntos totalmente concluidos, en versión pública, de los siguientes delitos: 1) COHECHO 2) FRAUDE PROCESAL 3) FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 4) USURPACION DE FUNCIONES PUBLICAS O DE PROFESIONES 5) DELINCUENCIA ORGANIZADA

6) PORTACION, TRAFICO Y ACOPIO DE ARMAS PROHIBIDAS 7) DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES O TECNICAS 8) LENOCINIO 9) DISCRIMINACIÓN 10) INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 11) VIOLENCIA FAMILIAR 12) HOMICIDIO 13) FEMINICIDIO 14) DISPARO DE ARMA DE FUEGO Y ATAQUE PELIGROSO 15) PRIVACION DE LIBERTAD 16) SECUESTRO 17) SUSTRACCION DE HIJO 18) EXTORSION 19) ALLANAMIENTO DE MORADA 20) TRATA DE PERSONAS 21) HOSTIGAMIENTO SEXUAL 22) ACOSO SEXUAL 23) ACTOS LIBIDINOSOS 24) VIOLACION 25) ROBO 26) ABUSO DE CONFIANZA 27) FRAUDE 28) DESPOJO Además manifiesto que el suscrito no tiene acceso a dichos expedientes debido a que no fue parte en los mismos, por lo que esta oficina sí tiene acceso a los expedientes totalmente concluidos, toda vez que el Tribunal cuenta con un sistema de control de expedientes iniciales y concluidos, y un archivo donde se envían los expedientes concluidos, donde se encuentra la información solicitada, misma que se encuentra debidamente sistematizada, por lo anterior no es óbice esta oficina sí cuenta con los elementos suficientes para que sea atendida en tiempo y forma la solicitud de información del suscrito en los términos en que se indica. Gracias” (sic)

Dicha información fue requerida al Titular del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, quien a través del oficio número 4467 de fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, previa búsqueda minuciosa en los libros de sentencias, índice y de gobierno que se llevan en el órgano jurisdiccional en comento, así como en el Sistema de Gestión Judicial Penal, remitió al Titular de la Unidad de Información copias certificadas de las resoluciones declaradas ejecutoriadas recientemente y dictadas respecto de hechos delictuosos en los que se encontraron antecedentes de registro en las fuentes de consulta mencionadas, cuya carpeta administrativa enjuició los delitos siguientes: cohecho (uno), falsificación de documentos (dos), usurpación de funciones públicas (uno), delincuencia organizada (uno), portación de arma prohibida (uno), homicidio (uno), feminicidio (uno), ataque peligroso (uno), privación de libertad (uno), secuestro (uno), extorsión (uno), actos libidinosos (uno), violación (dos) y robo (tres).

Considerando

Primero.- De una interpretación literal de lo que dispone el artículo 20 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se considera información reservada aquella que se contenga en expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado; es decir, procesos judiciales que se encuentren en trámite.

Segundo.- Del análisis y examen de las documentales públicas anteriormente mencionadas, se arriba a la conclusión que se trata de dieciocho procesos concluidos, tal como se advierte del respectivo auto por el cual causaron ejecutoria, por lo tanto, lo procedente es hacer entrega al

solicitante de las actuaciones procesales a las que se ha hecho referencia en versión pública.

Sin embargo, de conformidad con los artículos 6 y 48 de la citada ley, se estima que la entrega de la información solicitada está sujeta al previo pago de copias simples a costa del solicitante, habida cuenta cuando son indispensables para generar una versión pública, es decir, un documento en el que se eliminan, suprimen o borran datos personales que permitan identificar o hacer identificables a las partes que intervienen en determinado juicio concluido.

En el caso concreto, las documentales públicas están compuestas en total por dos mil hojas impresas por ambos lados, por lo que es procedente no sólo requerir al solicitante el pago a su costa de las copias simples, sino también hacer de su conocimiento que la eventual entrega de una versión pública de dichos documentos, no puede ponerse a su disposición a través del SAIMEX tal como lo adujo el propio peticionario en la solicitud que ahora se atiende, porque se integran en un volumen electrónicamente excesivo, razón por la cual, subirlas al sistema informático referido es prácticamente imposible.

Sin embargo, la eventual entrega al solicitante de la versión pública puede llevarse a cabo, previa identificación oficial, en la oficina que ocupa la Unidad de Información, ubicada en el edificio de la Escuela Judicial sito en Josefa Ortiz de Domínguez Norte número 306, colonia Santa Clara de la Ciudad de Toluca, Estado de México con un horario de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y conforme al calendario oficial de labores publicado en la página www.pjedomex.gob.mx

Tercero.- Como asunto concluido, se exceptúa del supuesto de clasificación contenido en la fracción VI del artículo 20 de la Ley de la materia.

Cuarto.- Este mismo criterio ha sido el adoptado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios, al hacer prevalecer la obligatoriedad de publicitar las constancias de expedientes que se encuentren concluidos por sentencia que hayan causado estado.

Quinto.- A pesar de lo anterior, el criterio señalado, también refiere que la información que se proporcione debe otorgarse en versión pública, es decir, eliminando los datos personales que identifiquen o hagan identificable a quienes en ellos intervienen, pues los referidos datos, sólo pueden ser publicitados por autorización expresa de las partes, por lo tanto, es adecuada la postura de proporcionar las constancias para dar

cumplimiento a los compromisos asumidos por esta institución y sean publicadas, en versión pública.

Sexto.- Lo anterior, porque los números de expediente, nombres de las partes, domicilios particulares y todos aquellos de uso personal, son datos considerados como confidenciales; luego entonces, la versión pública debe emitirse previa cancelación que en cada uno de ellos se haga de los datos personales y todos aquellos que se estimen de uso exclusivo de sus titulares, puesto que, con la puesta a disposición de datos de esa naturaleza, se falta a la finalidad de protección de datos personales, por lo que al testar en los documentos, conforme lo marca la normatividad aplicable en la entidad, los datos personales, no se vulnera el derecho de acceso a la información exigido.

Séptimo.- Respecto a la clasificación de datos personales, es pertinente mencionar que, siguiendo el criterio del Instituto de Acceso a la Información del Estado de México, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios debe entenderse por “Datos Personales”:

Artículo 2.- *Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:*

...

II. *Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable;*

...

La protección de la vida privada es un derecho reconocido por diversas disposiciones internacionales de las cuales México forma parte¹, entre las que se encuentra la propia Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dispone: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.²

En este sentido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasma el derecho a la vida privada como límite a la intromisión del Estado en el ámbito de la persona, al establecer en su artículo 16 que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Por su parte, los artículos 6 y 7 Constitucionales establecen como límite a la manifestación de las ideas y a la libertad de imprenta respectivamente,

¹ Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 12; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 17; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos 5º., 9º., y 18; Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 16.

² Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 11, fracción 2.

el ataque a los derechos de un tercero y el respeto a la vida privada. La libertad de expresar o publicar pensamientos encuentra entonces una restricción cuando con ello se afecte a la persona. Asumiendo que los datos personales se encuentran dentro de la esfera de la vida privada de una persona y que ésta debe ser protegida, surge el deber del Estado de brindar protección a los datos personales de los ciudadanos.

Ahora bien, el concepto de privacidad ha evolucionado a nivel internacional a partir del uso de las tecnologías de la información, las cuales permiten que la información concerniente a las personas físicas sea tratada, es decir, recabada, utilizada, almacenada y transmitida para diversos fines tanto en el sector público como en el privado, existiendo la posibilidad de generar en ocasiones, amenazas a la privacidad, derivadas de las injerencias arbitrarias o ilegales en dicha esfera de las personas.

Como ya se enunció anteriormente, ante la llegada en la escena internacional de un nuevo actor, la tecnología, diversos ámbitos de la vida privada, pública, económica y social, se han visto beneficiados por las facilidades que ésta ofrece dada la creciente importancia en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos personales.

Pero al mismo tiempo surgen nuevas amenazas a la privacidad, derivadas de las casi ilimitadas posibilidades de intromisión y acopio de informaciones personales sin que el propio interesado esté consciente de que la propia información es manipulada y utilizada de diversa manera y por distintos actores, día con día.

En pleno desarrollo de la era digital, y de una economía basada en el conocimiento ya que la información se traduce en poder, los gobiernos han sido conscientes de que los datos personales, siendo la fuente de las transacciones comerciales, también involucran derechos humanos fundamentales.

Actualmente existe un desarrollo normativo y doctrinal a nivel internacional acerca de un nuevo derecho concebido como derecho a la protección de datos personales, el cual al menos en la Unión Europea es considerado como un derecho fundamental.³

De acuerdo con lo señalado por Agustín Puente Escobar,⁴

³ El derecho a la protección de datos personales es sumamente nuevo, ya que se puede hablar propiamente del mismo dentro de los últimos treinta y cinco años y sólo en los últimos ha alcanzado el estatus de auténtico derecho fundamental, reconocido constitucionalmente en países como España, Alemania e Italia.

⁴ Puente Escobar, Agustín, “Breve descripción de la evolución histórica del marco normativo internacional del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal”, Protección de datos de carácter personal en Iberoamérica, Agencia Española de Protección de Datos, 2005, p. 39.

...a diferencia de lo acontecido con otros derechos fundamentales cuyo desarrollo se produjo paralelamente en el ámbito de Europa y de los Estados Unidos, el derecho a la protección de datos de carácter personal tiene un origen marcadamente europeo, ya que el desarrollo de los primeros estudios en esta materia y la adopción de las primeras legislaciones de protección de datos tiene lugar en Europa.

Resulta pertinente resaltar que el Tribunal Constitucional Español, en su sentencia 292/2000, del 30 de noviembre, ha dado luz sobre los alcances del derecho fundamental a la protección de datos personales, estableciendo su carácter autónomo e independiente, cuyo contenido persigue garantizar un poder de control de los individuos respecto de sus datos personales, así como el uso y destino de los mismos, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo.⁵

Como señala José Luis Piñar Mañas,⁶

...de la sentencia del Alto Tribunal se deduce que, a través de la regulación del artículo 1804 de la Constitución Española, el constituyente quiso garantizar un verdadero derecho fundamental a la protección de datos, cuya garantía deberá preservarse frente a cualquier invasión o intromisión ilegítima, merced a un sistema de protección específico e idóneo, marcando las diferencias existentes entre el “habeas data” y el derecho a la intimidad.

Continuando con lo expuesto por Piñar Mañas,⁷

...este derecho fundamental a la protección de datos, a diferencia del derecho a la intimidad, con comparte el objetivo de ofrecer una eficaz protección constitucional de la vida privada y familiar, atribuye a su titular un haz de facultades que consiste en su mayor parte en el poder jurídico de imponer a terceros la realización y omisión de determinados comportamientos concretados en la ley.

El concepto de datos personales, de manera genérica, se refiere al conjunto de informaciones sobre una persona física. Como ejemplo están el Convenio 108 del Consejo de Europa, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal,⁸ las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales,⁹ y la

⁵ Ya con anterioridad se dieron avances de interpretación constitucional en la materia, y el antecedente más importante se dio en Alemania con la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre la ley de Censos (1 BvR 209/83 ua), en el cual se reconoce la existencia de un nuevo derecho a la autodeterminación informativa, por el cual las personas pueden conocer quién cuándo y cómo utiliza sus datos personales, además de reconocer que deben existir autoridades independientes que garanticen ese nuevo derecho.

⁶ Piñar Mañas, José Luis, “El derecho fundamental a la protección de datos personales”, Protección de datos de carácter personal en Iberoamérica, Agencia Española de Protección de Datos, 2005, p. 23.

⁷ Ibidem, p. 24.

⁸ Firmado en Estrasburgo el 28 de enero de 1981.

⁹ 23 de septiembre de 1980.

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa relativa a la protección de datos personales emitida en 1995, la cual define como datos personales: “Toda información sobre una persona física identificada o identificable...”.

Dicha definición ha sido retomada en diversas legislaciones¹⁰, con adecuaciones, como lo es en el caso de México en el cual la definición contenida en la LAI, además de su parte genérica, añade algunos ejemplos de dicha información, al señalar que se consideran como datos personales a:

La información concerniente a una persona física identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad.¹¹

De manera que el derecho a la protección de datos personales se traduce en el reconocimiento y establecimiento de prerrogativas, principios y procedimientos para el tratamiento por parte del Estado o de terceros, de la información concerniente a personas físicas.

Las prerrogativas son el derecho a ser informado de la existencia de bases de datos que contengan su información, a otorgar su consentimiento libre, expreso e informado para la transmisión de dicha información, así como el derecho de oponerse a que sean utilizados y finalmente, a solicitar que se corrijan o cancelen (derecho al olvido) cuando así resulte procedente.

Los principios de protección de datos internacionalmente aceptados varían en cuanto a su denominación y alcances,¹² y en México se han reconocido en la LAI los relativos a licitud, calidad, acceso y corrección de información, seguridad, custodia y cuidado de la información y consentimiento para su transmisión. Estos principios permiten que los datos sean actualizados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines por los que fueron recabados, que se soliciten de manera lícita; que se dé a conocer a la persona qué información

¹⁰ Tal es el caso de las directrices de la OCDE sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales, la Privacy Act de Canadá y diversas legislaciones europeas en la materia.

¹¹ LAI, artículo 3º, fracción II.

¹² Prácticamente en la mayoría de las legislaciones sobre privacidad y protección de datos personales se encuentran recogidos los principios que guían al tratamiento adecuado de la información personal, en algunos casos de manera más explícita, como lo son las regulaciones de los países miembros de la Unión Europea, Canadá y Argentina, por ejemplo.

suya obra en bases de datos, quién es el responsable de su tratamiento y de qué manera puede ejercer el derecho de acceso y corrección de datos: que a dicha información sólo tenga acceso el titular de los datos a menos que otorgue su consentimiento libre expreso e informado para que otros conozcan su información, y finalmente, que existan medidas de seguridad que garanticen la custodia e integridad de la información.

Los procedimientos deben establecer mecanismos institucionales para poder ejercer los derechos antes descritos, es decir, deben existir las vías y autoridades (en ocasiones independientes) que garanticen la tutela de la privacidad.

En cuanto a esto la ley en la materia establece lo siguiente:

Artículo 2. *Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:*

...

XIV. Versión Pública: *Documento en el que se elimina, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso;*

Octavo.- En conclusión de lo argumentado, proporcionar los datos con los que institucionalmente se cuenta, no entra en contradicción con la idea de que se permita el acceso a los documentos de los que emana la información requerida, pues lo importante de transparentar dicha información es conocer los criterios de los juzgadores.

Noveno.- Consecuentemente, se aprueba la versión pública de las documentales analizadas.

Ante tales circunstancias, el Comité se pronuncia de la siguiente manera:

ACUERDO: SEGUNDO	Se aprueba generar la versión pública de las resoluciones dictadas en las carpetas administrativas donde se enjuiciaron los delitos siguientes: cohecho (uno), falsificación de documentos (dos), usurpación de funciones públicas (uno), delincuencia organizada (uno), portación de arma prohibida (uno), homicidio (uno), feminicidio (uno), ataque peligroso (uno), privación de libertad (uno), secuestro (uno), extorsión (uno), actos libidinosos (uno), violación (dos) y robo (tres); todas y cada una de ellas radicadas en el índice del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, previo pago de las copias simples necesarias para tal fin, a
---------------------	---

	costa del solicitante. Hecho lo anterior, dicha versión pública quedará a disposición del solicitante para su entrega en la oficina de la Unidad de Información. Se instruye al titular de la Unidad de Información para que comunique a través del SAIMEX el presente proveído a la parte solicitante, en los términos descritos para su cumplimiento. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
--	--

3.2.- Presentación de solicitudes para ejercer derechos ARCO.

A).- Acuerdo para atender la petición número 0001/UI/CD/2014, presentada por .

Antecedentes

Vista la solicitud de mérito recibida a través de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en fecha seis de mayo de dos mil catorce, en la cual se peticiona al titular de ésta dependencia lo siguiente:

“gire sus apreciables instrucciones al RESPONSABLE DE PUBLICACIÓN DE LA LISTA Y BOLETÍN JUDICIAL EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO a fin de que de inmediato se supriman y se den de baja de inmediato mis datos personales de dicho sistema electrónico con motivo de los juicios radicados ante el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, CON RESIDENCIA EN ATLACOMULCO, MÉXICO bajo los expedientes 307/2013 y 874/2013” (sic)

En fecha trece de mayo del año en curso, el Subdirector del Boletín Judicial, remitió a la Unidad de Información copias simples de diversos ejemplares del Boletín Judicial, mismas que se tienen a la vista, por lo que se procede a analizar su contenido y se advierte la publicación de 55 (cincuenta y cinco) acuerdos notificados por éste medio a las partes del expediente 307/2013, y 09 (nueve) acuerdos notificados también por dicho medio a las partes del expediente 874/2013.

Cabe precisar que en ambos procedimientos el ahora solicitante es parte demandada, tal como se advierte de la consulta electrónica al Boletín Judicial visible a través de los servicios en línea del portal institucional www.pjedomex.gob.mx

Considerando

Primero.- De conformidad con lo establecido por los artículos 28, párrafo segundo y 29, párrafo primero, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, procede no sólo identificar en el Boletín Judicial el nombre del solicitante y el tipo de juicio ó acción intentada en contra del demandado, sino también reservar **provisionalmente** éste último dato (considerado como confidencial porque se estima que en ocasiones puede dañar la honra y la dignidad de la persona) a fin de impedir su tratamiento en la base de datos del medio de comunicación procesal en comento, cuya captura se origina a partir de la notificación practicada en el órgano jurisdiccional por el funcionario judicial con facultades legales para tal efecto.

Segundo.- Sin soslayar los requisitos para practicar notificaciones consistentes en el número del expediente y el nombre de las partes, tal como lo prevé el artículo 1.182 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, lo procedente es solicitar al Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, para que en términos del presente acuerdo se sirva instruir al Notificador adscrito a dicho órgano jurisdiccional, quien deberá capturar en la base de datos del Boletín Judicial, los datos emanados de las subsecuentes notificaciones practicadas dentro los expedientes registrados con los números 307/2013 y 874/2013 conforme a los requisitos previstos en el precepto legal invocado, por lo que el citado funcionario judicial dejará de capturar información en el campo relativo al tipo de juicio.

Tercero.- Este mismo criterio ha sido el adoptado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios, al hacer prevalecer la obligatoriedad de publicitar las constancias de expedientes que se encuentren concluidos por sentencia que hayan causado estado, o bien, por cancelación de parte interesada como es el caso.

Cuarto.- A pesar de lo anterior, el criterio señalado, también refiere que la información que se publique debe garantizar la protección de datos personales, es decir, eliminando información sensible que identifiquen o hagan identificable a quien es su titular.

Quinto.- Lo anterior, porque el tipo de juicio, en la concepción del Comité de Información es dato considerado como confidencial porque se estima que en ocasiones puede dañar la honra y la dignidad de la persona; luego entonces, en el caso que nos ocupa, la publicación del Boletín Judicial debe emitirse previo bloqueo de la información relacionada al tipo de juicio con la finalidad de garantizar **provisionalmente** la protección de los datos personales del solicitante, pero conforme a la normatividad aplicable en los juicios familiares en los que es parte.

Dicha medida deberá surtir efectos a partir de las subsecuentes notificaciones practicadas dentro de los expedientes cuyos números son: 307/2013 y 874/2013 registrados en el índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, México, con posterioridad a la fecha de recepción del oficio que notifica éste acuerdo hasta en tanto se dé respuesta definitiva a la solicitud de mérito.

Sexto.- Con base en lo anterior, remítase copia del presente acuerdo al Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, para efectos de su cumplimentación en los términos descritos en el Considerando Segundo; hecho lo anterior, requiérase a Su Señoría para que informe la instrumentación del bloqueo de datos en el Boletín Judicial, a partir de la subsecuente notificación practicada dentro los expedientes registrados con los números 307/2013 y 874/2013 con posterioridad a la fecha de recepción del oficio que notifica éste acuerdo.

Bajo tales circunstancias, el Comité se pronuncia de la siguiente manera:

ACUERDO: TERCERO	Se instruye al titular de la Unidad de Información para que remita copia del presente acuerdo al Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, para efectos de su cumplimentación e instrumentación en los términos descritos en el Considerando Segundo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
---------------------	---

No habiendo más asuntos por tratar, se da por terminada esta sesión Extraordinaria del Comité de Información del Poder Judicial del Estado de México, siendo las once horas del día de la fecha.

Lic. Joel Alfonso Sierra Palacios

Consejero de la Judicatura
Presidente del Comité

Lic. Lorenzo Hernández Morales

Director General de Contraloría
Integrante del Comité

Lic. Heriberto Benito López Aguilar

Titular de la Unidad de Información
Secretario del Comité